

del procedimiento sobre la veracidad del relato de hechos. El último supuesto incluye, por ejemplo, aquellas situaciones en que el solicitante de una *anti-suit injunction* (u otra medida conminatoria) no revela al tribunal toda la información necesaria.

Si lo que verdaderamente se solicita es una revisión sobre el fondo, esto solo podrá realizarse en el contexto de una apelación. De igual modo, no se deberá permitir a una parte de una solicitud anterior que discuta esa solicitud fundamentando su pretensión en alegaciones o medios probatorios de los que dispuso o pudo haber dispuesto en la vista anterior, pero que, por la razón que fuese, el solicitante o su representante legal decidió no utilizar.

En la práctica no siempre ha resultado sencillo combinar esta Regla con el principio de finalidad de las resoluciones judiciales⁴¹⁹. En todo caso, las partes no deben utilizar la posibilidad que presenta la Regla 3.1(7) CPR como un medio alternativo a la apelación⁴²⁰.

CAPÍTULO XI LAS COSTAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES

I. Conforme a lo dispuesto en el CPR, r.44.1, dentro del concepto de «costas» se encuentran tanto los gastos legales («*legal costs*»), destinados a cubrir el tiempo que el representante legal haya destinado al caso en particular, como cualquier otro desembolso («*disbursement*») relacionado con el proceso, esto es, tasas judiciales, pagos a terceros (por ejemplo, peritos), etc.⁴²¹. En este sentido, el cliente tiene un **deber contractual** de pagar todas las costas en que incurra durante el transcurso del proceso. Sin embargo, como veremos, en determinados supuestos, se podrán recuperar parte de esas costas como consecuencia de un acuerdo con la contraparte o debido a una resolución judicial que obligue a este último al pago de una cantidad de las referidas costas⁴²², tanto en la resolución que ponga fin al procedimiento como en todas aquellas que se dicten durante la pendencia del mismo («*interim orders*»)⁴²³. El tribunal, a la hora de decidir en materia de costas, tendrá siempre en consideración el *overriding objective*.

II. En términos generales, será el tribunal el que fije discrecionalmente y con base en el *overriding objective*, la **cuantía** del pronunciamiento de condena en costas. Sin embargo, las partes podrán igualmente acordar la cuantía de las costas, pudiendo solicitar la aprobación judicial de dicho acuerdo, siempre y cuando sea proporcional y razonable⁴²⁴. No obstante, en

⁴²¹ El CPR resulta de aplicación a la generalidad de los procesos que se inicien ante el *County Court* o el *High Court*, o se tramiten ante el *Court of Appeal* (CPR, r. 2.1) y, por analogía, en el *Supreme Court*, quedán excluidos procedimientos especiales que quedan sujetos a sus propias normas, como los procesos de insolvencia, que se regularán por lo dispuesto en la *Insolvency Act 1986*.

⁴²² Como concluyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en *Hoare v. United Kingdom* [2011] EHRR SE1, la referida inversión de la obligación del pago de las costas es plenamente conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 1), dado que actúa como un desincentivo para litigios innecesarios.

⁴²³ La PD 44 facilita el significado de las distintas *interim costs orders* que pueden recaer.

⁴²⁴ Kay, M., *Blackstone's Civil Practice 2014. The Commentary, op. cit.*, pág. 1140.

⁴¹⁹ En opinión de AHMED, M., en «Judicial Interpretation of CPR rule 3.1(7)», *Civil Justice Quarterly*, vol. 32, issue 1, 2013, págs. 95 a 108, la jurisprudencia hasta la fecha no ha sido capaz de proveer de un único criterio interpretativo sobre la aplicación de la Regla 3.1(7) CPR.

⁴²⁰ AHMED, M., «Judicial Interpretation of CPR rule 3.1(7)», *op. cit.*, pág. 97.

determinados procesos (tales como las costas incurridas en el acto del juicio en los procedimientos designados a la *fast track*), el CPR r. 45 dispone que las costas serán fijas (*fixed costs*), esto es, no sujetas a valoración por las partes o por el tribunal. Asimismo, en los casos del *small track*, contrariamente a lo que ocurre en las otras dos vías procesales, rara vez se condena en costas. Sin embargo, sigue siendo una decisión discrecional, de forma que el tribunal, en determinadas circunstancias, podrá condenar a una de las partes en materia de costas⁴²⁵.

III. Por último, al igual que ocurrió en su momento con la reforma de Lord Woolf, la regulación de las costas se ha visto considerablemente modificada a raíz del informe publicado en 2010 por Sir Rupert Jackson, *Jackson Report*, y que entró en vigor el 1 de abril de 2013 con el objetivo de reducir el, hasta ese momento, aumento de las costas asociadas al proceso.

La justificación de su informe, en opinión de Jackson, reside en que «en algunas áreas del proceso civil las costas son desproporcionadas e impiden el acceso a la justicia»⁴²⁶. Como veremos, la reforma ha incluido ciertas modificaciones que han alterado la gestión de los procedimientos de costas.

2. LA GESTIÓN DE LAS COSTAS: EL *PRECEDENT H*

I. Una de las principales modificaciones implementadas por el *Jackson Report* es la inclusión de un procedimiento designado a la administración o gestión de las costas por el tribunal (*costs management*).

Previamente las partes, tanto en la *fast track* como en la *multi-track*, debían proporcionar una estimación de sus costas al entregar sus *allocation questionnaires* e igualmente en la *Case Management Conference* al entregar los *Pre-Trial Checklists*. Sin embargo, a raíz de la reforma, la situación en los casos designados a la *multi-track* se ha visto modificada.

II. De esta forma, a partir del 1 de abril de 2013, en la gran mayoría de los asuntos ante la *Queen's Bench* o la *Chancery Division* del *High Court* y en el *County Court*, las partes⁴²⁷ deberán presentar e intercambiarse, en el plazo fijado en el CPR o por el tribunal, una estimación o presupuesto de las costas en que incurrirán a lo largo del proceso, denominado «*Precedent H*», el cual, además, estará sujeto al examen del tribunal. Así pues, si las partes no alcanzasen un acuerdo sobre las cuantías expresadas en la estimación presentada al tribunal, una vez revisada y atendiendo a su proporcionalidad y, en su caso, una vez realizadas las modificaciones oportunas, aprobará el presupuesto. Esta modificación supone todo un reto, dado que las partes deben ser capaces de valorar y estimar por adelantado las costas que probablemente incurrirán a lo largo del procedimiento, con base en los principios de proporcionalidad y razonabilidad (r. 44.3 CPR).

III. La **función** del *Precedent H* es valorar y proporcionar una estimación fiel de las costas que probablemente incurrirá cada una de las partes en el desarrollo del procedimiento, por lo que en él se incluye un *statement of truth*, en el que también queda reflejado el *indemnity principle*. El objetivo de este ejercicio de transparencia es confirmar que las partes se encuentran en igualdad de condiciones (r. 3 CPR) y que el tribunal pueda mantener un mayor control sobre los costes del procedimiento.

La PD 3E facilita un documento explicativo del presupuesto, además de una plantilla Excel para que las partes puedan incluir los importes en que pretenden incurrir.

IV. De no presentar la citada estimación, se entenderá que el presupuesto de la parte incumplidora exclusivamente incluye las tasas judiciales. Asimismo, si las partes no logran alcanzar un acuerdo podrán oponerse en la *Cost Management Conference*, es decir, en una vista específicamente habilitada para solventar las discrepancias que pudieran surgir en ese sentido. Este tipo de vistas se podrán llevar a cabo por teléfono y, si la situación así lo requiere, incluso por escrito. Escuchadas las partes, el juez confirmará el presupuesto u ordenará su revisión.

Uno de los principales riesgos potenciales de este sistema es que las partes se opongan de forma prácticamente automática a las estimaciones de costas de los litigantes contrarios, con el afán de evitar que puedan quedar vinculados por las mismas⁴²⁸.

⁴²⁵

CIVIL JUSTICE COUNCIL, «A Guide to Bringing and Defending a Small Claim», April 2013, pág. 3.

⁴²⁶

JACKSON, R., «Review of Civil Litigation Costs: Final Report», diciembre 2009, prólogo.

⁴²⁷

Salvo el caso de los *litigant-in-person*.

In the: [to be completed]
Parties: [to be completed]
Claim number: [to be completed]

Claim number: [to be completed]

[illegible]

This estimate excludes VAT (if applicable), success fees and ATE insurance premiums (if applicable), costs of detailed assessment, costs of any appeals, costs of enforcing any judgment and [complete as appropriate]

Statement of Truth

This budget is a fair and accurate statement of incurred and estimated costs which it would be reasonable and proportionate for my client to incur in this litigation.

Signed
Position

Date _____

In the: [to be completed]
Parties: [to be completed]
Claim number: [to be completed]

	RATE (per hour)	DISCLOSURE			WITNESS STATEMENTS			EXPERT REPORTS		
		Incurred costs	Estimated costs	TOTAL	Incurred costs	Estimated costs	TOTAL	Incurred costs	Estimated costs	TOTAL
		£	£	£	£	£	£	£	£	£
1	Fee earners' time costs (fee earner description)	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours
2		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
3		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
4		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
5	Total Profit Costs (1 to 4)	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
6	Experts' costs									
7	Disbursements	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
8	Counsel's fees [indicate seniority]									
9	Leading counsel									
10	Junior counsel									
11	Court fees									
12	Other Disbursements									
13	Total Disbursements (6 to 11)	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
14	Total (5 + 13)	0	£0.00	£0.00	0	£0.00	£0.00	0	£0.00	£0.00

In the: [to be completed]
Parties: [to be completed]
Claim number: [to be completed]

	RATE (per hour)	PTR			TRIAL PREPARATION			TRIAL		
		Incurred costs	Estimated costs	TOTAL	Incurred costs	Estimated costs	TOTAL	Incurred costs	Estimated costs	TOTAL
		£	£	£	£	£	£	£	£	£
1	Fee earners' time costs (fee earner description)	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours	Hours
2		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
3		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
4		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
5	Total Profit Costs (1 to 4)	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
6	Experts' costs									
7	Disbursements	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
8	Counsel's fees [indicate seniority]									
9	Leading counsel									
10	Junior counsel									
11	Court fees									
12	Other Disbursements									
13	Total Disbursements (6 to 11)	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
14	Total (5 + 13)	0	£0.00	£0.00	0	£0.00	£0.00	0	£0.00	£0.00

3. LA LIMITACIÓN JUDICIAL DE LAS COSTAS

I. En el ejercicio de su potestad discrecional, el juez podrá imponer una limitación a las costas de todo o parte de la reclamación ⁴²⁹ (*«cost capping»*) que una de las partes pretenda recuperar, prospectiva o retrospectivamente ⁴³⁰, aunque, debemos señalar que, en la práctica, esta última es poco usual ⁴³¹. De esta forma, la resolución en modo alguno delimita el importe que las partes puedan destinar a la defensa de su caso, sino meramente la suma que, de obtener una condena favorable en costas, podrán recuperar.

Esta facultad de limitar el importe de las costas tiene su **origen** en diversos textos normativos. En opinión de Gage J. en *AB c. Leeds Teaching Hospitals*:

«En relación con el art. 51 de la [SCA] 1981 Act, con las diferentes Partes del CPR que tratan sobre las costas, y dando efecto al *overriding objective* del PCR, en mi opinión, el tribunal ostenta el poder de emitir una resolución judicial para limitar las costas [*costs cap order*].» ⁴³².

II. La resolución, en la mayoría de las ocasiones, vendrá precedida de una **solicitud** formulada por una de las partes, conforme a lo dispuesto en el CPR Part 23, a la que se acompañará la prueba pertinente. Dicha solicitud deberá demostrar que es necesario limitar las costas que la contraparte pudiera recuperar en interés de la justicia en la medida en que, de otro modo, existiría un alto riesgo de incurrir desproporcionadamente en costas, sin que lo anterior pudiera limitarse mediante las *case management directions*. Así, el tribunal podrá emitir este tipo de resoluciones en cualquier momento, aun cuando es preferible interponer la solicitud en las primeras fases del proceso, dado que de lo contrario, ya se habrán incurrido en la mayoría de las costas, por lo que la resolución devendría ineficaz ⁴³³. Cuando una de las partes entendiese que existen razones materiales y sustanciales de peso que imponen la variación de la referida resolución, podrá solicitarlo al tribunal.

4. LA VALORACIÓN DE LAS COSTAS

I. Como regla general, el tribunal es el encargado de valorar y cuantificar las costas, salvo acuerdo de las partes. En este punto, mención especial merecen nuevamente los cambios introducidos por la reforma de Sir Jackson.

Antes de la reforma, las costas se sustentaban exclusivamente sobre la base de que el vencido se hacía responsable de las costas de la parte vencedora (*«the loser pays the winner's costs»*), todo ello supeditado a la discreción del tribunal (*«the discretion of the court»*). Dicha máxima —denominada como *«costs follow the event»* — sigue en vigor, si bien se encuentra flexibilizada por el CPR. De esta forma, el CPR, r. 44.2(6) recoge hasta siete diferentes situaciones en las que el tribunal puede fallar en costas alejándose de la referida norma, permitiendo reflejar su

⁴²⁹ La parte que solicite esta limitación deberá especificar en su solicitud si se refiere a la totalidad a parte de la reclamación.

⁴³⁰ Autores como Hurst, P. T., en *Civil Costs*, Sweet and Maxwell, 2013, pág. 36, opinan que las resoluciones judiciales destinadas a limitar las costas que una de las partes pueda recuperar, en el caso de obtener una resolución favorable en materia de costas, sólo son posibles en relación con las costas «que se incurran en el futuro».

⁴³¹ CUNNINGHAM-HILL, S. & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, op. cit., pág. 45.

⁴³² *AB c. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust* [2003] EWHC 1034 (QB).

⁴³³ Hurst, P. T., *Civil Costs*, op. cit., pág. 36.

	RATE (per hour)	SETTLEMENT / ADR		CONTINGENT COST A: [EXPLAIN]		CONTINGENT COST B: [EXPLAIN]	
		Incurred costs	Estimated costs	TOTAL	Incurred costs	Estimated costs	TOTAL
1	Fee earners' time costs (fee earner description)	£	Hours	£	Hours	£	Hours
		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
2		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
3		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
4		£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
5	Total Profit Costs (1 to 4)	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00	£0.00
6	Experts' costs	£0.00		£0.00		£0.00	£0.00
7	Fees	£0.00		£0.00		£0.00	£0.00
8	Disbursements			£0.00		£0.00	£0.00
9	Counsel's fees [indicate seniority]			£0.00		£0.00	£0.00
10	Leading counsel			£0.00		£0.00	£0.00
11	Junior counsel			£0.00		£0.00	£0.00
12	Court fees			£0.00		£0.00	£0.00
13	Other Disbursements			£0.00		£0.00	£0.00
14	Explanation of disbursements (details to be completed)			£0.00		£0.00	£0.00
15	Total Disbursements (6 to 11)	£0.00		£0.00		£0.00	£0.00
16	Total (5 + 13)			£0.00		£0.00	£0.00

In the: [to be completed]
Parties: [to be completed]

Claim number: [to be completed]

descontento con la actitud de una de las partes o evidenciar aquellas situaciones en las que no se han concedido todas las peticiones solicitadas por el vencedor⁴³⁴. La máxima de que el perdedor pague las costas del litigante vencedor (r. 44.2 CPR) es solo el punto de partida y, con cierta asiduidad, los tribunales se han apartado de esta norma general⁴³⁵. Sin embargo, en aquellas situaciones en que el tribunal pretenda alejarse del referido principio tendrá que razonar tal decisión, dado que de otro modo el *Court of Appeal* podrá rectificar el pronunciamiento en costas.

En suma, la citada reforma incorporó al anterior sistema el novedoso principio denominado como «*Qualified One Way Costs Shifting*», en relación con las reclamaciones por daños personales. De conformidad con este principio, desde el 1 de abril de 2013, el demandante, en los casos de lesiones personales, en la mayoría de las ocasiones⁴³⁶, no tendrá que hacer frente a las costas del demandado si la demanda resulta desestimada, si bien el demandado deberá cubrir las costas del demandante si prospera la reclamación.

II. La situación descrita no es sino un claro ejemplo de la amplia facultad de disposición de la que gozan los tribunales a la hora de razonar su pronunciamiento en costas, conforme a lo dispuesto en el CPR, r. 44.2. El tribunal tendrá en consideración prácticamente toda actividad de las partes en relación al proceso. Alguna de las actitudes que pueden resultar perjudiciales a las partes es su negativa a negociar o a cumplir con algún *pre-acción protocol* o que el tribunal considere que la reclamación de la parte victoriosa era ciertamente exagerada.

Asimismo, cuando la reclamación se inicie ante el *High Court* y el tribunal competente resultase ser un *County Court*, el pronunciamiento en costas que pudiera recaer a favor de la parte que generó dicha situación se podría ver reducido en hasta un 25 por ciento (s. 51(8) SCA 1981).

III. Por último, la **valoración** de las costas se podrá practicar según el criterio del tribunal —a falta del citado acuerdo entre las partes⁴³⁷, atendiendo a dos métodos: el sumario («*summary assessment*») o el detallado («*detailed assessment*»).

En el **summary assessment**, el tribunal determinará las costas que la parte que hubiera obtenido el pronunciamiento favorable podrá recuperar del litigante contrario. Dicha decisión se tomará al final de la vista, sobre la base de una descripción de las costas («*statement of costs*») que las partes han de presentar, utilizando el formulario habilitado, a estos efectos (N260) con anterioridad a la celebración de la vista.

En el formulario se deberán incluir de forma detallada las costas, incluyendo, entre otros aspectos, las horas que se han dedicado al asunto, así como las tarifas que resulten de aplicación. De no presentar el *statement of costs* una interpretación literal del CPR llevaría a la pérdida del derecho a recuperar las costas o la automática valoración de las mismas atendiendo al *detailed assessment*. Tal interpretación se ha rechazado por la jurisprudencia⁴³⁸, en la medida en que se considera una sanción desproporcionada, de forma que, si bien dicho incumplimiento sí se tendrá en consideración a la hora de proceder a la valoración de las costas, lo más conveniente es proceder a la suspensión del procedimiento a la espera del cumplimiento de la obligación.

⁴³⁴ SIME, S., *A practical Approach to Civil Procedure*, op. cit., pág. 510.

⁴³⁵ CUNNINGHAM-HILL, S. & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, op. cit., pág. 36.

Dicha norma está sujeta a excepciones. Por ejemplo, cuando se califique a la demanda como fraudulenta, en aquellas ocasiones en que se desestimen las pretensiones de una de las partes por carecer de causa o, en todo caso, si se considera una reclamación como viciada al ser un abuso del proceso.

⁴³⁷ KAY, M., *Blackstone's civil practice. The Commentary 2014*, op. cit., pág. 1139.

⁴³⁸ *MacDonald c. Three Holdings Ltd* [2000] CPLR 439.

Por el contrario, en el **detailed assessment**, la cuantificación de las costas se deja a merced del juez encargado de las costas o *costs judge* (que generalmente será un *district judge* en el *County Court* o la *Senior Courts Costs Office* en el *High Court*)⁴³⁹, quien cuantificará las costas en una vista especialmente prevista para tal fin. Con carácter general, se celebrará dentro de los 3 meses posteriores a la conclusión del proceso, una vez presentadas las facturas que reflejen los honorarios («*bill of costs*»). Si una de las partes no estuviera conforme con algún extremo de las facturas recibidas tendrá la oportunidad de presentar un formulario al tribunal («*Precedent G*») en el que deberá detallar los puntos sobre los que está disconforme y las razones de la discrepancia. La parte favorecida por el pronunciamiento en costas podrá responder al formulario si bien, en ningún caso, estará obligado a ello.

5. EL PRONUNCIAMIENTO EN COSTAS: BASES PARA SU VALORACIÓN

I. El criterio de valoración de las costas por parte de los tribunales varía dependiendo del fundamento o base en el que motiven su pronunciamiento. Existen dos criterios o principios: el denominado *standard basis* o el *indemnity basis*. En todo caso, se excluirán del pronunciamiento aquellos gastos que se hayan incurrido irrazonablemente o cuya cuantía carezca de lógica. En la gran mayoría de ocasiones, el pronunciamiento en costas se sustenta en el *standard basis*, aunque el tribunal tiene la facultad de, cuando lo entienda necesario⁴⁴⁰, valorar las costas en atención al *indemnity basis*, en especial, cuando concurra un comportamiento culpable o reproachable por una de las partes.

II. Conforme al **standard basis** (r. 44.3 (2) CPR), además, de los gastos considerados como «razonables», solo serán procedentes aquellas costas que sean proporcionales y, en caso de duda, se resolverá a favor de la parte que fuese a hacer frente a las costas. Por el contrario, de atender al *indemnity basis*, no existe ningún requisito de proporcionalidad pero de existir alguna duda sobre la razonabilidad de las costas se resolverá a favor de la parte que haya obtenido un pronunciamiento en costas favorable. El tribunal deberá especificar en su pronunciamiento el principio utilizado en su fundamentación; de lo contrario, o en caso de no aplicar ninguno de los principios descritos, se entenderá que ha aplicado el *standard basis*.

III. Para valorar la «**proporcionalidad**», con anterioridad a la reforma de Sir Jackson, el único criterio orientativo era el fijado en *Homme Office c. Lownds*, según el cual, si se demostraba que los gastos incurridos habían sido necesarios se deberían incluir en la cuantía del fallo condenatorio en costas, sin importar que se hubiesen realizado de forma desproporcionada⁴⁴¹. No obstante, este criterio ya no resulta de aplicación.

En la actualidad, los gastos destinados por las partes durante el procedimiento deben ser proporcionales, es decir, que aquellos cuya cuantía se entienda desmedida o desproporcionada deberán quedar excluidos o deducirse del importe final. Ello en la medida en que uno de los principales objetivos del CPR es facilitar el acceso a un sistema judicial que sea razonable-

⁴³⁹ En la *Senior Courts Costs Office*, se encuentran jueces encargados de cuantificar las costas y resolver las disputas que pudieran surgir en ese sentido en los *Senior Courts*.

⁴⁴⁰ En *Munkenbeck & Marshall c. McAlpine* [1995], EGCS 24, el *Court of Appeal* se negó a aportar una lista de las circunstancias que pudieran dar lugar a la valoración de las costas en aplicación del *indemnity basis*, dado que, en su opinión, ello se debería resolver caso a caso, dependiendo de los hechos.

⁴⁴¹ *Homme Office c. Lownds* [2002] EXCA Civo 365.

mente asequible en términos económicos⁴⁴². Así, el CPR, r. 44.3 (5) dispone que las costas serán proporcionales siempre y cuando tengan relación con: (i) las cuantías relacionadas con el procedimiento; (ii) el valor de la reclamación no dineraria; (iii) la complejidad del litigio; (iv) cualquier trabajo adicional generado por la conducta de la parte condenada en costas; y (v) cualquier otro aspecto genérico relacionado con el procedimiento.

IV. Con el objetivo de servir como indicador para el cálculo de los referidos honorarios, el *Civil Justice Council Costs Committee* publica una **guía** que contiene los importes de las tarifas de los letrados, si bien solo tiene carácter orientativo y, en ocasiones, debido a la complejidad del asunto los honorarios pueden superar las cifras recogidas en la guía.

En cualquier caso, los *solicitors* tienen la obligación de proporcionar la mayor información posible sobre las costas al principio del procedimiento (SRA Code of Conduct 2013), algo que suelen cumplir al enviar al cliente la denominada «*client care letter*», en la que se incluye, entre otros aspectos: el método de pago, cualquier acuerdo sobre la financiación del litigio que hayan alcanzado, la obligación del cliente de abonar los gastos del proceso y la cuantía de los mismos.

V. Una vez el tribunal se haya pronunciado en materia de costas, el representante legal deberá informar de dicha resolución a su cliente dentro de los 7 días desde que se dictó la resolución. El tribunal podrá requerir al letrado a que aporte pruebas del cumplimiento de este deber.

6. EL PRINCIPIO INDEMNIZATORIO

I. En todo caso, lo dispuesto anteriormente queda sujeto al cumplimiento del principio indemnizatorio («*indemnity principle*»), que establece que: la parte vencedora no podrá recuperar en costas una cuantía superior a la que ella misma hubiera destinado o se encontrara obligada contractualmente a abonar a su propia representación letrada⁴⁴³. La jurisprudencia ha concluido que el *indemnity principle* se debe **valorar individualmente**, atendiendo a cada una de las partidas que componen la factura final («*item-by-item basis*»)⁴⁴⁴, de forma que la parte condenada en costas no tendría que pagar, en aplicación de este principio, aquellas cuantías que la parte vencida no tuviera que abonar a su letrado, aun cuando ésta última estuviera obligada a pagar el resto de la factura. Como resultado, según lo dispuesto en *Bailey c. IBC Vehicles*, el tribunal podrá requerir a las partes a que faciliten toda la información necesaria (*disclosure*) para comprobar si se ha cumplido con el *indemnity principle*⁴⁴⁵.

II. En caso de existir algún **interrogante sobre la correcta aplicación del *indemnity principle***, el juez encargado de las costas («*costs judge*») decidirá. Para ello, la parte beneficiada por el pronunciamiento deberá aportar al tribunal los documentos necesarios, tales como la *client care letter*, el contrato de representación letrada, las facturas, etc. El problema surge cuando algunos de estos documentos se encuentran amparados por el privilegio o secreto profesional, en cuyo caso existe un conflicto sobre si se deben facilitar a todas las partes o exclusivamente al juez encargado del proceso en materia de costas.

⁴⁴² SIME, S., *A practical Approach to Civil Procedure*, op. cit., pág. 514.

⁴⁴³ No obstante, existen ciertas excepciones, que están exentas de la aplicación de este principio, como por ejemplo los CFA (*vid. supra* Capítulo IV).

⁴⁴⁴ Ejemplo de ello *General of Berne Insurance Co. c. Jardine Reinsurance Management Ltd* [1998] 1 WLR 1231 y *Nederlandse Reassurance Groep Holding NV c. Bacon and Woodrow* [1998] LTL 9/6/98.

⁴⁴⁵ *Bailey c. IBC Vehicles Ltd* [1998] 3 All ER 570.

III. Una de las recomendaciones del *Jackson Report* consistía en la **derogación** de este principio, pero no fue así y, en la actualidad, sigue plenamente vigente⁴⁴⁶. Esta recomendación se encuentra respaldada por The Law Society, debido a los problemas que presenta su aplicación⁴⁴⁷. De hecho, en multitud de ocasiones, la aplicación rigurosa de este principio ha derivado en un incremento de la litigación. Asimismo, el *indemnity principle* puede originar que el infractor quede indemne debido a un fallo técnico en el acuerdo entre el *solicitor* y su cliente.

7. LAS WASTED COSTS ORDERS

I. Conforme a la SCA 1981, s. 51(6), los representantes legales pueden ser condenados a **abonar personalmente** las costas que se hayan incurrido de forma innecesaria («*wasted costs*»). Cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que dicte una resolución en ese sentido e, incluso, el propio tribunal *ex officio* puede alcanzar tal conclusión.

Las actuaciones del letrado por las que puede incurrir en este tipo de responsabilidad se extienden a cualquiera de las desarrolladas durante todo el procedimiento. En cualquier caso, para que pueda dictarse una resolución judicial de condena: (i) el solicitante deberá demostrar al tribunal que el letrado ha actuado indebidamente, irrazonable o negligentemente (s. 51(7) SCA 1981), que (ii) como consecuencia de la conducta del representante legal una de las partes haya incurrido en costas innecesarias, y (iii) teniendo en consideración todas las circunstancias que rodean al caso, se considere justo condenar al representante legal a pagar al solicitante la totalidad o parte de las costas innecesariamente incurridas.

II. Las **solicitudes** se presentarán al final del procedimiento, conforme a lo dispuesto en la Parte 23 del CPR, o por el propio tribunal *ex officio*. El representante legal tendrá derecho a ser escuchado en una vista, para poder defender su postura y, a la sazón, tratar de evitar la resolución condenatoria. Si, finalmente, se dicta dicha resolución, el tribunal deberá especificar el importe.

8. LAS PART 36 OFFER

8.1. Consideraciones generales

I. En el sistema judicial inglés la forma más común de poner fin a un litigio consiste en alcanzar un acuerdo que es considerado como el mejor resultado posible de una disputa⁴⁴⁸. De hecho, existe una clara tendencia e incluso interés público en favorecer y fomentar la transacción entre las partes⁴⁴⁹. En este sentido, el CPR en su Parte 36 prevé un sistema transaccional sujeto a unas reglas particulares en materia de costas: la denominada «**Part 36 Offer**». Se trata de un método efectivo para poder limitar los gastos legales asociados al proceso, y pretende potenciar que las partes alcancen un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta oferta transaccional se puede presentar tanto en primera instancia como en sede de apelación. Sin embargo, la *Part 36 Offer* realizada en primera instancia no extiende sus efectos una vez terminada ésta, por lo que será necesario realizar una nueva oferta en segunda instancia.

⁴⁴⁶ KAY, M., *Blackstone's civil practice. The Commentary 2014*, op. cit., pág. 1152.

⁴⁴⁷ THE LAW SOCIETY, «Review of civil litigation costs: final report», octubre 2010, pág. 34.

⁴⁴⁸ CORRÉS, P., «Comparative Review of Offers to Settle-Would an Emerging Settlement culture pave the way for their adoption in Continental Europe?», *Civil Justice Quarterly*, Vol. 32, 1, 2013, pág. 42.

⁴⁴⁹ SIME, S., «Offers to settle: incentive, coercion, clarity», *Civil Justice Quarterly*, Vol. 32, 2, 2013, pág. 182.

Este afán por tratar de resolver las disputas de forma privada se acentuó con la reforma de Lord Woolf, si bien las características de aquellos tipos de acuerdos distan del procedimiento actual, además de las reformas llevadas a cabo por el Jackson Report, en vigor desde el 6 de abril de 2013.⁴⁵⁰

II. En virtud de esta última modificación la *Part 36 Offer* se debe interpretar de forma independiente, de manera que no le resulta aplicable el derecho común de los contratos a, por ejemplo, su oferta y aceptación. Esta es la posición que ha mantenido la jurisprudencia, como bien resume Moore-Bick L.J. en *Gibbon c. Manchester City Council*: «La seguridad se debe encomiar tanto en derecho procesal como sustantivo, especialmente, quizás, en un código procesal que se debe interpretar y cumplir por ciudadanos de a pie que quieran gestionar sus propios litigios. A mi juicio, la Pt 36 se redactó teniendo presente estas consideraciones y se debe interpretar y concebir atendiendo a sus términos, sin tener en consideración otras normas derivadas del derecho común, salvo cuando ello manifestamente se pretenda».⁴⁵¹

En aplicación de lo dispuesto en *Gibbon c. Manchester City Council*, a título ilustrativo, el principio de derecho común contractual de que una oferta se entiende automáticamente rechazada al realizar una contraoferta no es aplicable a las *Part 36 Offers*, lo que, como veremos, excluye la posibilidad de renunciar implícitamente a este tipo de ofertas. Esta decisión ha sido criticada por parte de la doctrina, llegándola a catalogar como la «receta para el desastre».⁴⁵² El objetivo principal del fallo parece ser ensalzar la seguridad en la aplicación de la norma, en especial para los «ciudadanos de a pie» (*litigant-in-person*), pero el final del fallo de Moore-Bick L.J. («salvo cuando ello manifestamente se pretenda») produce el efecto contrario, al provocar confusión sobre cuáles son las ocasiones en que la *Part 36 Offer*, efectivamente, pretende la aplicación del derecho común contractual.

De esta forma, el sistema dual implantado por Moore-Bick L.J. puede provocar incertidumbre, en especial, para las partes que no están representadas por un letrado, dado que, aun cuando puedan conocer el funcionamiento del derecho común, es muy probable que desconozcan las particularidades de una *Part 36 Offer*.⁴⁵³

III. Por último, es preciso destacar que estas ofertas se consideran documentos '*without prejudice save as to costs*' (r. 36.13(1) CPR). Este tipo de ofertas no se pueden divulgar, al estar amparadas por el secreto profesional (documentos *without prejudice* o *privileged*), de manera que no se podrán tener en consideración a efectos de responsabilidad, salvo en lo referente a la tasación de las costas (*save as to costs*). Como consecuencia, las *Part 36 Offers* no se consideran como una admisión de responsabilidad y no se podrá informar de las mismas al juez encargado del juicio (*trial judge*), sino hasta que haya determinado la responsabilidad de cada una de las partes, para evitar, de este modo, que pueda verse influenciado. En caso de no respetar esta decisión e informar al juez, podrá revocarse *ex officio*⁴⁵⁴, salvo cuando considere que de continuar no produciría ningún resultado injusto para ninguna de las partes.

⁴⁵⁰ Por ejemplo, en un primer momento, solo el demandado podía presentar una oferta de transacción, que consistía en depositar el importe en que consistiera dicha oferta en el juzgado. Sin embargo, en el sistema actual, ambas partes pueden presentar *Part 36 Offers* y se ha eliminado la necesidad de presentar depósito.

⁴⁵¹ *Gibbon c. Manchester City Council* [2010] EXCA Civ 726.

⁴⁵² Kax, M., *Blackstone's Civil Practice* 2014. *The Commentary*, op. cit., pág. 1024.

⁴⁵³ Sime, S., «Offers to settle: incentive, coercion, clarity», op. cit., pág. 192.

⁴⁵⁴ Corréas, P., «Comparative Review of Offers to Settle—Would an Emerging Settlement culture pave the way for their adoption in Continental Europe?», op. cit., pág. 42.

Sin embargo, una vez fijada la responsabilidad de las partes y el quantum, el siguiente paso consiste en la determinación de las costas. No obstante, de ignorar la realización de una *Part 36 Offer* el tribunal no podría valorar si una de las partes (bien el oferente o el destinatario de la oferta) ha actuado de forma irracional —lo que tendría su efecto en el pronunciamiento en costas— razón por la que, llegado el momento de fijar las costas, estas ofertas se deberán conocer por el tribunal.

8.2. Requisitos de la *Part 36 Offer*

I. Como regla general, ambas partes podrán presentar en todo momento, es decir, con anterioridad o durante el transcurso del proceso, una *Part 36 Offer*, en cualquier tipo de procedimiento, pero con la excepción de las reclamaciones asignadas al *small track* (r. 27.2 CPR). Sin embargo, no se entenderá efectivamente realizada hasta que el oferente ('*offeror*') practique su **notificación por escrito** al destinatario (*offeree*) (r. 36.9(1) CPR). Esta notificación es de suma importancia, según lo dispuesto en *Sutton Jigsaw Transport c. Croydon London Borough*, que consideró que la sola aceptación verbal en juicio no cumplía con los requisitos expuestos y, por lo tanto, no podía ser catalogada como *Part 36 Offer*, dado que, al parecer del tribunal: «[E]l CPR 36, en efecto, proporciona una normas claras y las partes deberían estar en las mismas condiciones; ambas deben conocer las normas y actuar conforme a las mismas si quieren obtener los beneficios que ofrece el CPR 36».⁴⁵⁵

II. Así pues, el CPR (r. 36.2(2)) fija los **requisitos de obligado cumplimiento** para que una propuesta de acuerdo sea considerada como una *Part 36 Offer* y, en consecuencia, le sean aplicables los efectos en materia de costas que el CPR recoge para este tipo de ofertas. De este modo, la *Part 36 Offer* deberá:

- Presentarse por escrito, en forma de carta o utilizando el formulario previsto: N242A.⁴⁵⁶
- Dejar constancia de que se trata de una *Part 36 Offer* y que pretende beneficiarse de sus consecuencias en materia de costas
- Precisar que durante un lapso de tiempo no inferior a 21 días, antes del comienzo del juicio, de ser aceptada la oferta, el demandado deberá abonar las costas del demandante. Este periodo de tiempo se denominará: '*relevant period*'. En aquellos casos en los que la oferta se realice en un plazo inferior a 21 días con anterioridad al comienzo del juicio, el plazo se extenderá hasta el final del juicio, salvo que el tribunal fije otro periodo
- Aclarar si la oferta se refiere a parte o la totalidad de la reclamación
- Especificar si la oferta tiene en consideración cualquier demanda reconvenacional.

Todos estos requisitos representan el contenido mínimo que debe contener una *Part 36 Offer*⁴⁵⁷, de manera que son de ineludible cumplimiento y su inobservancia puede resultar

⁴⁵⁵ *Sutton Jigsaw Transport Ltd c. Croydon London Borough* [2013] EWHC 874 (QB).

⁴⁵⁶ Aun cuando no es obligatoria la utilización de dicho formulario es altamente recomendable para, de este modo, asegurarse el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el CPR.

⁴⁵⁷ El CPR recoge que, en determinados casos, como por ejemplo, en reclamaciones por daños personales, la *Part 36 Offer* deberá contener información adicional. Del mismo modo, por ejemplo, en las reclamaciones de carácter económico, la oferta deberá especificar una cuantía.

grave error⁴⁵⁸, en el sentido de no aplicar las consecuencias en materia de costas que lleva ésta asociada⁴⁵⁹. En efecto, según lo dispuesto en *Therulis c. Groupama Insurance*⁴⁶⁰, la falta de cumplimiento de cualquiera de las exigencias recogidas en el CPR tendrá como resultado que la oferta no podrá ser clasificada como *Part 36 Offer*, con las consecuencias que lo anterior comporta. Por lo tanto, es esencial prestar una especial atención a la redacción de este tipo de ofertas⁴⁶¹.

Notice of offer to settle (Section 1 - Part 36)

Click here to reset formClick here to print form

Name of court (if proceedings have started)	
Claim No. (or other ref.)	
Claimant (including ref)	
Defendant (including ref)	

To the Offeree (s Solicitor) (insert name and address)

Take notice the (defendant)(claimant) offers to settle the claim. This offer is intended to have the consequences of Section 1 Part 36. If the offer is accepted within _____ days (must be at least 21 days) of service of this notice the defendant will be liable for the claimant's costs in accordance with Rule 36.10 of the Civil Procedure Rules.

The offer is to settle:

- (tick as appropriate)
- ☐ the whole of the claim
 - ☐ part of the claim (give details below)
 - ☐ a certain issue or issues in the claim (give details below)

The offer is:

(insert details - expand box as necessary)

Note: Rule 36.5 specifies details that must be included in an offer including periodical payments of damages for future pecuniary loss.
Rule 36.11 requires that an offer by a defendant to pay a sum of money (other than periodical payments) must be paid within 14 days of acceptance.

☐ It (does)(does not) take into account all(part) of the following counterclaim:

(give details of the counterclaim)

N202A Notice of offer to settle (Section 1 Part 36) (08/11)

© Crown Copyright 2011

⁴⁵⁸ SIME, S., «Offers to settle: incentive, coercion, clarity», *op.cit.*, pág. 194.
⁴⁵⁹ HURST, P.T., en «Civil Costs», *op. cit.*, pág. 55.

⁴⁶⁰ *Therulis c. Groupama Insurance Co Ltd* [2012] EWHC 3 (TCC).

⁴⁶¹ CUNNINGHAM-HILL, S. & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, *op. cit.*, pág. 282.

Include only if claim for provisional damages

☐ The offer is made in satisfaction of the claim on the assumption that the claimant will not (develop (state the disease)) OR (suffer (state type of deterioration)). But if that does occur, the claimant will be entitled to claim further damages at any time before (insert date).

OR

☐ This offer does not include an offer in respect of the claim for provisional damages.

To be completed by defendants only

☐ This offer is made without regard to any liability for recoverable benefits under the Social Security (Recovery of Benefits Act) 1997.

OR

☐ This offer is intended to include any relevant deductible benefits for which I am liable under the Social Security (Recovery of Benefits Act) 1997.

The amount of [£ _____] is offered by way of gross compensation.

[I have not yet received a certificate of recoverable benefits]

OR

[The following amounts in respect of the following benefits are to be deducted (insert details):

Type of benefit	Amount
-----------------	--------

The net amount offered is therefore [£ _____]]

Signed

Position held
(if signing on
behalf of a firm
or company)

Offeror(s) solicitor)

Date

III. Además de los requisitos fijados en el CPR r. 36.2, el contenido de la oferta deberá recoger los términos exactos de la propuesta para que, de este modo, el destinatario de la misma pueda tomar una decisión suficientemente razonada. En este sentido, aun cuando el oferente tiene plena libertad para redactar su contenido, deberá ser en todo caso más beneficiosa que la reclamación en sí misma. De otro modo, no podrá catalogarse como *Part 36 Offer*, conforme a lo argumentado en *AB c. CD & Ors*, al afirmar que una oferta presentada por el demandante cuyos términos eran prácticamente idénticos a los reflejados en su reclamación no podría beneficiarse de los efectos en costas recogidos en el CPR para las *Part 36 Offer*, en la medida en que: «A mi juicio, la oferta debe contener algún elemento genuino de concesión por parte del demandante, de forma que se añada un valor significativo en el contexto del litigio. El principal objetivo de la Parte 36 es alentar los acuerdos razonables de las disputas con anterioridad al juicio, o incluso antes de que comience el procedimiento (ver regla 36.3(2)(a) que dispone que

la *Part 36 offer* puede presentarse en cualquier momento, incluyendo antes del inicio del procedimiento). El concepto de un acuerdo debe, por su propia naturaleza, comportar un proceso de concesiones y beneficios mutuos. El llamado «acuerdo» que sólo implique beneficios sin dar ninguna concesión sería, a mi entender, una contradicción»⁴⁶².

En cualquier caso, si los términos de la *Part 36 Offer* no estuvieran claros el destinatario, en el plazo de siete días desde que recibió la oferta, podrá solicitar al oferente (preferiblemente por escrito) que realice la aclaración pertinente, quien deberá responder asimismo en el plazo de siete días desde la recepción de la solicitud. De no realizar la aclaración, el destinatario podrá solicitar al tribunal que ordene al oferente que realice la misma en el plazo fijado por la propia resolución.

8.3. La aceptación

I. Como ha quedado apuntado, la única forma de aceptar la totalidad o parte de una *Part 36 Offer* es notificándola **por escrito**, sin que el CPR prevea ningún requisito de forma adicional en este sentido.

Si se aceptara con anterioridad al inicio del procedimiento, las partes, una vez se haya practicado la notificación por escrito de la aceptación, deberán cumplir con sus obligaciones según lo estipulado en la propia oferta de transacción. Por otro lado, si el procedimiento ya se hubiese iniciado se deberá comunicar al tribunal su aceptación, lo que producirá la automática suspensión del procedimiento (r. 36.11(1) CPR). En este sentido, la *Part 36 Offer* origina obligaciones contractuales para las partes, por lo que, en caso de incumplimiento, la parte que ha cumplido podrá solicitar su ejecución en el mismo procedimiento⁴⁶³.

II. El plazo **habilitado para la aceptación** de este tipo de ofertas es prácticamente ilimitado, hasta que no se produzca su efectiva retirada o renuncia por parte del oferente. No obstante, si la notificación de la aceptación se practica una vez comenzado el juicio, ésta solo será efectiva si lo permite el tribunal (r. 36.9(3)(d) CPR); mientras que será necesario el consentimiento de las partes si la notificación se practicase una vez terminado el juicio pero con anterioridad a que se dicte la sentencia (r. 36.9(5) CPR).

De producirse la aceptación durante el plazo de 21 días provisto en la propia oferta (*relevant period*), el demandante tendrá derecho a las costas en que hubiere incurrido hasta que se hubiese notificado la aceptación de la oferta (r. 36.10(1) CPR). Estas costas se valorarán atendiendo al *standard basis* (r. 44.3(2) CPR). El demandante tendrá derecho a ellas, en todo caso, en aplicación del principio *costs follow the event* (r. 44.3(2)(a) CPR), lo que constituye una regla prácticamente invariable⁴⁶⁴.

En caso contrario, es decir, de aceptar las costas una vez terminado el plazo de 21 días, el demandante tendrá derecho a las costas en que hubiese incurrido hasta el término de este periodo; si bien las costas que se produzcan desde el final del *relevant period* hasta la fecha en que se notifique la aceptación de la oferta serán a cargo del aceptante, en beneficio del oferente.

El derecho del demandante a recobrar las costas hasta la aceptación de la oferta (en el caso de producirse dentro del plazo de 21 días) o hasta el vencimiento del *relevant period* no

está sujeto a la discreción del tribunal⁴⁶⁵. Por el contrario, en el resto de los casos el tribunal, razonadamente y en aquellas situaciones en que considere que de seguir las directrices recogidas en el CPR se alcanzaría un resultado injusto, podrá fallar en costas sin cumplir con lo dispuesto en el CPR.

III. Finalmente, salvo acuerdo de las partes, cuando la oferta consista en el pago de un importe concreto la parte obligada deberá proceder al **abono** de dicha cuantía dentro de los 14 días desde la aceptación (r. 36.11 (6)(a) CPR).

8.4. La retirada y modificación

I. Uno de los efectos más destacables de la mencionada sentencia *Gibbon v. Manchester City Council* [2010] *EXCA Civ* 726, es que podrán subsistir durante el procedimiento diversas *Part 36 Offers*, ya que serán válidas y, por lo tanto, el destinatario podrá aceptarlas, hasta que el oferente decida notificar expresamente y por escrito la renuncia o retirada de las mismas. Así pues, si el destinatario no está conforme con los términos de la oferta y desea rechazarla no deberá comunicar expresamente su decisión al oferente. Sin embargo, es ciertamente aconsejable informar al oferente del rechazo de su *Part 36 Offer*, seguido de las razones que han llevado a tomar esa decisión, en la medida en que lo anterior fomenta la continuidad de la negociación y, a la sazón, cumple con los fundamentos del *overriding objective*.

II. Por otro lado, el oferente podrá retirar la oferta o modificar sus términos en cualquier momento, si bien durante el *relevant period* necesitará de la aprobación del tribunal para: (i) retirar o renunciar la oferta o (ii) cuando desee modificarla en perjuicio del destinatario, esto es, incluyendo condiciones menos ventajosas. Transcurrido este plazo, el oferente podrá retirar o modificar la oferta a su juicio, siempre y cuando, lo realice por escrito.

8.5. Las consecuencias en materia de costas

I. Es importante partir de la premisa expuesta de que las *Part 36 Offers* sirven como medio para cumplir con el objetivo de orden público de alcanzar un acuerdo privado de voluntades que permita terminar la disputa. Como resultado y con el propósito de fomentar este tipo de convenios, el CPR (r. 36.14(1)) recoge las consecuencias derivadas del rechazo de una *Part 36 Offer* si, con posterioridad, la resolución no resultase más beneficiosa que la citada oferta⁴⁶⁶.

El **umbral** para decidir si una oferta es más beneficiosa lo fija el propio CPR (r. 36.14(1A) para las reclamaciones monetarias, al determinar que una resolución se considerará más ventajosa si la cuantía concedida es superior a la reflejada en la oferta, por pequeña que pudiera ser la diferencia, lo cual aporta cierta seguridad jurídica y previsibilidad. No obstante, el tribunal podrá no aplicar esas consecuencias si lo considerase injusto o cuando la oferta no cumpliera con los requisitos necesarios para que fuese considerada como una *Part 36 Offer*.

En este sentido, el Tribunal de Apelación en *F & C Alternative Investments v. Barthelemy* determinó que, cuando no se han cumplido los requisitos fijados legislativamente por el Par-

⁴⁶² *AB v. CD & Ors* [2011] *EWHC* 602 (Ch).

⁴⁶³ CUNNINGHAM-HILL, S. & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013–2014*, op. cit., pág. 289.

⁴⁶⁴ SIME, S., *A practical Approach to Civil Procedure*, op. cit., pág. 401.

⁴⁶⁵ *Lahey v. Pirelli Tyres Ltd* [2007] 1 *WLR* 998.

⁴⁶⁶ En virtud de lo establecido en *Relf v. De Guerin* [2011] *CP Rep* 24, no podrá penalizarse a una parte que finalmente ha obtenido un resultado menos positivo que lo recogido en su propia *Part 36 Offer*.

lamento en el CPR, no se podrán aplicar por analogía las consecuencias en materia de costas recogidas en exclusiva para las *Part 36 Offers*⁴⁶⁷.

II. De esta forma, el destinatario que decline la oferta y no obrenga una decisión judicial que, como mínimo, fuere igual de beneficiosa que la oferta rechazada se enfrentará a una serie de **consecuencias negativas**, recogidas en el propio CPR (r. 36.14), que resultan de aplicación en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones. Ejemplo de lo anterior son las ocasiones en que la parte en cuyo perjuicio se impondrían las mencionadas medidas demostrase que su aplicación estricta resultaría injusta⁴⁶⁸, lo que en la práctica resulta ciertamente complicado.

Las consecuencias difieren dependiendo de quién rechazó la oferta. Así, en el caso de que hubiese sido el demandante el que la hubiere rechazado sin conseguir, al terminar el procedimiento, una resolución más ventajosa que la propuesta del demandado, aquél deberá —salvo que el juez lo considere injusto— abonar:

- Las costas del demandado desde el término del *relevant period* (r. 36.14 (2)(a) CPR)
- El importe al que se habrán de añadir los intereses sobre dichas costas (r. 36.14 (2) (b) CPR).

Por otro lado, de ser el demandado quien hubiese rechazado la oferta sin conseguir, al terminar el procedimiento, una resolución más ventajosa que la propuesta del demandante, el tribunal le condenará —salvo que lo considere injusto— al pago de:

- Los intereses sobre la cuantía del procedimiento (excluyendo intereses) con un tipo máximo del 10 por ciento sobre el tipo base⁴⁶⁹, desde el término del *relevant period*
- Las costas del demandante, una vez vencido el *relevant period*, valoradas en aplicación del *indemnity basis*
- Los intereses sobre las costas valoradas aplicando el *indemnity basis* a un tipo que no supere el 10 por ciento del tipo básico
- Una cuantía adicional que no exceda de 75.000 libras esterlinas⁴⁷⁰.

La cuantía adicional de hasta 75.000 libras esterlinas fue una de las medidas introducidas por la reforma de Sir Jackson. La cuantificación de este importe varía entre las reclamaciones monetarias y el resto. En suma, en las **reclamaciones monetarias**, la cuantía adicional se calculará sobre la base de la suma conferida por el tribunal en su resolución, aplicando un 10 por ciento sobre las primeras 500.000 libras esterlinas más el 5 por ciento del importe que exceda el anterior límite.

Por el contrario, en las **reclamaciones no monetarias**, la cuantía adicional se calcula sobre la base de las costas a que haya condenado el tribunal, aplicando el 10 por ciento sobre las primeras 500.000 libras esterlinas más el 5 por ciento del importe que exceda el anterior límite. En ambos casos, es decir, tanto en los casos de reclamaciones dinerarias como en las no dinerarias, la cuantía resultante no podrá superar las 75.000 libras esterlinas⁴⁷¹.

⁴⁶⁷ *F & C Alternative Investments (Holdings) Limited & Ors v. Barthelemy* [2012] EWCA Civ 843.

⁴⁶⁸ Hurst, P. T. en *Civil Costs*, op. cit., pág. 72.

⁴⁶⁹ El tipo básico es aquél fijado por el Banco de Inglaterra que se utiliza como base para los tipos de interés del resto de las entidades financieras.

⁴⁷⁰ Esta sanción del pago de una cuantía adicional de hasta 75.000 libras esterlinas es una de las novedades introducidas por la reforma de Sir Jackson, con el objetivo de alentar tanto a los demandantes a formular *Part 36 Offers* como a los demandados a aceptar las *Part 36 Offers* que hayan sido razonablemente realizadas por el demandante.

⁴⁷¹ Stime, S., *A practical Approach to Civil Procedure*, op. cit., pág. 402.

La imposición de esta sanción adicional es de suma importancia dado que, de rechazar la parte demandada la oferta razonablemente realizada por el demandante y de obtener éste finalmente una resolución judicial cuanto menos igual de beneficiosa que su oferta, el resultado en costas resulta en un incumplimiento del principio indemnizatorio⁴⁷². En definitiva, como apuntó Smith LJ en *Hall v. Stone*: «Actualmente, cuando se espera que ambas partes actúen de manera razonable y busquen llegar a un acuerdo cuando sea posible, puede ser acertado penalizar en cierta medida a la parte que rechaza una oferta razonable o que no realice una contraoferta»⁴⁷³.

III. Así, la función principal de las *Part 36 Offers* es trasladar el riesgo al destinatario de la oferta, que deberá asumir una posible penalización en materia de costas en la eventualidad de no conseguir una resolución judicial más beneficiosa comparada con los términos de la oferta rechazada, salvo en las situaciones en que el tribunal lo considerase injusto.

El tribunal, para considerar si la aplicación del criterio expuesto pudiese resultar injusto tendrá en consideración todas las circunstancias que rodean el litigio, en especial (r. 36.14(4) CPR):

- Los términos de la *Part 36 Offer*
- El momento en que se presentó y, en particular, el periodo entre la oferta y el comienzo del juicio
- La información disponible para las partes en el momento de realización de la oferta
- La conducta de las partes a la hora de proporcionar más información para que la parte destinataria pudiera tomar su decisión de la manera más informada posible.

⁴⁷² CUNNINGHAM-HILL, S. & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, op. cit., pág. 287.

⁴⁷³ *Hall v. Stone* [2007] EWCA Civ 1374.